

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia con el fin de resolver el recurso de apelación, contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **CARLOS JOSÉ MÚNERA BARBOSA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.) y **PENSIONES ANTIOQUIA**, tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-018-2018-00608-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

En lo que interesa resolver a esta instancia, el demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia y/o la nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata el actor que cuenta con tiempos públicos y privados previos al traslado de régimen, para un total de 896,71 semanas cotizadas inicialmente al ISS y posteriormente a PENSIONES DE ANTIOQUIA.

Expone que el día 14 de agosto de 2002 se afilió al RAIS suscribiendo formulario de afiliación ante la AFP PORVENIR S.A., en la cual ha venido realizando aportes hasta la fecha.

Manifiesta que al momento del traslado, la AFP PORVENIR S.A. no le suministró información adicional consistente en la edad mínima y el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, no se le indicó con que IBC debía cotizar para poder alcanzar una pensión anticipada o para completar el capital para acceder a la pensión de vejez, no se le informó a que edad se redimiría su bono pensional, ni la diferencia entre la mesada pensional que recibiría en el RAIS frente a la mesada del RPM.

Finalmente indica que mediante respuesta del 22 de marzo de 2018 Colpensiones despachó de manera negativa su solicitud de tener como nula o ineficaz su traslado al RAIS, reactivar su afiliación al RPM y reconocerle la pensión de vejez una vez cumplidos los requisitos y que en el mismo sentido PENSIONES DE ANTIOQUIA, negó tal solicitud mediante comunicación del 7 de junio de 2018, indicando que es un fondo cerrado y que por tal razón no puede efectuar nuevas afiliaciones.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado del demandante al RAIS y condenando en consecuencia a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a PENSIONES DE ANTIOQUIA todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante, como cotizaciones, bonos pensionales en caso de existir, los rendimientos que se hubieran causados, sumas adicionales de las aseguradoras y cuotas de administración, ordenando a PENSIONES DE ANTIOQUIA a mantener activa la afiliación del demandante en el RPM, a recibir las sumas antes señaladas y continuar como la administradora de pensiones del actor.

Para fulminar condena, la *a quo* consideró que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a los afiliados al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de PORVENIR S.A. que al momento de la afiliación inicial del demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como

prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación pre impreso, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado del demandante al RAIS.

Finalmente, declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, entre ellas la de prescripción.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de PORVENIR S.A., apela la sentencia en lo que tiene que ver con la declaratoria de ineficacia, indicando que si lo que se pretende es declarar la ineficacia que prevé el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, esta norma en forma clara y sin lugar a interpretaciones distintas, establece que cualquier persona natural o jurídica que realice actos atentatorios contra el libre derecho de elección del afiliado, se haría acreedor a una multa ADMINISTRATIVA impuesta por el Ministerio de Trabajo, y si bien, menciona que quedará sin efecto la afiliación, también lo es que, bajo ninguna circunstancia se refiere si quiera por aproximación a lo dispuesto en los artículos 1740 y ss, por un principio básico de derecho, cual es el de la inescindibilidad de las normas, que impide acudir en forma indiscriminada a diferentes normas para resolver un asunto en concreto; pese a lo expuesto, para definir la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, se acude a normas propias del sistema general de pensiones -artículo 271 de la Ley 100 de 1993-, sin consideración a que esta disposición, indica en forma expresa que será ineficaz un traslado cuando se ejecutan las conductas con la intención que allí se menciona, y para establecer los efectos de esta ineficacia, se acude a disposiciones del Código Civil, sin tener en cuenta igualmente los presupuestos que este compendio normativo consagra para que se declare la nulidad de un acto o contrato.

Así mismo indica que el formulario de afiliación suscrito por el demandante, es un documento público que se presume auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el párrafo del art. 54A del CPT, que además contiene la declaración de que trata el artículo 114 de la 100 de 1993, esto es que la selección fue libre, espontánea y sin presiones, hecho que fue ratificado por la demandante en el interrogatorio de parte, sumado a que el referido documento no fue tachado, ni desconocido como lo disponen los artículos 246 y 272 respectivamente del Código General del Proceso, por lo que probatoriamente no es dable restarle valor a dicho documento.

Aduce que si bien en este proceso se señala que PORVENIR no allegó pruebas del cumplimiento de sus deberes para con la parte actora al momento de la vinculación, esto es entregar información, completa, veraz y oportuna, tal inferencia no se ajusta a la realidad procesal, por cuanto dicha AFP de manera palmaria, cumplió con la carga procesal impuesta pese a la inversión que se hizo de la carga de la prueba, contrario a lo dispuesto legalmente al respecto, en la medida que aportó los documentos que tenía su poder para demostrar que el demandante ha estado vinculado a PORVENIR producto de una decisión libre e informada, lo que se acredita no solo con el formulario de afiliación, el cual se reitera es un documento que se presume autentico, sino también con la conducta del afiliado, que permitió el descuento con destino al fondo privado, pruebas que analizadas de manera crítica y en conjunto, conducen con certeza a concluir que la intención de la parte actora era pertenecer al régimen de ahorro individual.

Manifiesta que jurídicamente no es viable imponerle cargas distintas a PORVENIR a las previstas en las leyes existentes al momento en que sucedió la afiliación de la parte demandante, pues constituye una violación al debido proceso y a la confianza legítima del fondo PORVENIR, ya que para cuando se celebró el acto jurídico de vinculación, no solo la afiliada para ese momento era jurídicamente capaz, sino que además, el citado acto contiene objeto y causa lícita, y ahora por cuenta de interpretaciones y el alcance que se hace de algunas normas, se desconocen instituciones primarias de un estado social de Derecho como son la validez y los efectos de los actos jurídicos.

Aduce que si la consecuencia de la declaratoria de ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido, se genera que el contrato de afiliación nunca existió, PORVENIR no debió administrar nunca los recursos de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros que generó dicha cuenta no se causaron y en este sentido tampoco existió el cobró por cuotas de administración; sin embargo, el artículo 1746 del Código Civil habla de las restituciones mutuas, intereses, frutos y el abono de mejoras, y con base en ello debe entenderse que aunque se declare una ineficacia de la afiliación y se haga la ficción de que nunca existió el contrato, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras como fueron los rendimientos financieros producto de la buena gestión de administración de PORVENIR y por tanto dicha AFP tiene derecho a conservar las comisiones de administración, dado que hizo rentar el patrimonio del demandante.

Expone que la orden impartida por la a quo en cuanto a las sumas que debe devolver PORVENIR, constituye un enriquecimiento sin causa en favor de PENSIONES DE

ANTIOQUIA, toda vez que está recibiendo unos dineros frente a los cuales no generó rendimientos y que ni siquiera van a entrar a enriquecer el patrimonio del demandante dado que no corresponden a conceptos que pertenezcan a la cuenta de ahorro del demandante ni financian la pensión de vejez.

Señala que estando claro que los gastos de administración no corresponden a valores que pertenezcan a los afiliados en ninguno de los regímenes pensionales, por cuanto no financian la pensión de vejez y por tanto no son parte de esta, y por tanto, estos conceptos que no se encuentran en la cuenta de ahorro individual si prescriben, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y de la SS.

Finalmente aduce que es claro para la Ley y la jurisprudencia, que la seguridad social en pensiones no asegura una cobertura de una cuantía sino de una contingencia, y dicha contingencia se encuentra protegida, toda vez que a la demandante no se le ha negado ninguna prestación, por lo que le corresponde al Tribunal dilucidar si en este caso el RAIS es más desventajoso frente al RPM, por lo que solicita se revoque el fallo de primera instancia.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente las apoderadas judiciales del DEMANDANTE y de COLPENSIONES allegaron dentro del término de dicho traslado, escritos de alegaciones, en los cuales señalaron lo siguiente:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

“Se solicita al despacho que proceda a confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el a quo, es decir, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional que efectuara la parte demandante del régimen de prima media con prestación definida administrado para el caso en particular por PENSIONES DE ANTIOQUIA, al régimen de ahorro individual y como consecuencia de tal ineficacia, el retorno sin solución de continuidad del RAIS al régimen de prima media.

Debe tener presente el despacho que a mi poderdante, la AFP privada, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que el traslado de régimen

pensional se dio de manera libre y voluntaria, así las cosas, al no ser libre y voluntaria la decisión por el desconocimiento de las consecuencias que este le ocasionaría, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271 del mismo texto normativo.

Sobre el particular, más concretamente en lo referente a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 46292 del 3 de septiembre de 2014, con ponencia de la doctora ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERON, en la cual el órgano de cierre de la jurisdicción laboral sostiene:

“Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar el cambio; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa”

“Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado: Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla”

El anterior criterio jurisprudencial sobre el tema ha sido reiterado hasta la fecha por las diferentes sentencias que sobre el particular se han proferido, indicando el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, que ese deber de información que se encuentra en cabeza de los fondos privados de pensiones, aplica para cualquier tipo de afiliado que se vaya a trasladar o a afiliarse al régimen de ahorro individual, independiente de que sea o no beneficiario del régimen de transición, así mismo ha indicado que el libre consentimiento, es decir, debidamente informado, no se puede concluir de la firma que el afiliado plasma en el formulario de afiliación al RAIS, por lo que es deber del fondo privado, demostrar al interior del proceso, que cumplió con el deber de darle al afiliado esa información clara, completa y eficiente, que le permitiera tener presente las consecuencias que le acarrearía ese traslado de régimen en su futuro pensional, lo que en el caso que nos ocupa brilla por su ausencia.

Teniendo en cuenta las normas aplicables al caso concreto, así como el criterio jurisprudencial que debe aplicarse para resolver las pretensiones de la demanda y el material probatorio que reposa en el expediente, se solicita una vez más a la Sala Laboral, que proceda a confirmar la sentencia que fue proferida en primera instancia.”

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

“ En primer lugar, es oportuno hacer mención **El art. 13 de la Ley 100 de 1993, que aseguró la libertad en escogencia de régimen** pensional, por su parte el Decreto 663 de 1993 el cual aplica como regulación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, toda vez que hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de cesantías en Colombia; estableció en el Art. 97 la importancia del deber de informar al consumidor financiero, adicionalmente el decreto 692 de 1994, en su artículo 5 establece que las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo.

Ahora bien, es oportuno mencionar que solo para el 2014, con la expedición de la ley 1748, se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y consecuentemente diferentes niveles de intensidad del deber de información según la legislación vigente.

Descendiendo al caso concreto las premisas normativas antes referidas, podemos indicar y consecuentemente colegir, lo siguiente:

1. El traslado de régimen del afiliado (a) – demandante, y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió el 30 DE JUNIO DE 1995, en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 *“Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”*, solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

2. Es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian.

Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la

carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones.

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la Corte Suprema de Justicia tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo de la demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e IMPOSIBLE de cumplir.

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la práctica de la prueba decretada en el proceso, se colige del interrogatorio de parte realizado al señor CARLOS JOSÉ MÚNERA BARBOSA, que nadie lo obligó a efectuar su traslado al Régimen de ahorro individual, sino que lo realizó de manera voluntaria.

Por todo lo anterior, de manera muy respetuosa les solicito a los señores magistrados REVOCAR la sentencia de primera instancia íntegramente.

En el evento de confirmarse la decisión frente a la ineficacia del traslado de régimen pensional, solicito respetuosamente también se confirme que PENSIONES DE ANTIOQUIA es la entidad encargada de activar la afiliación del demandante, recibir las sumas provenientes de la AFP y continuar como su administradora de pensiones.

Ahora bien, en caso de que la decisión en esta instancia sea la de confirmar decisión frente a la ineficacia del traslado de régimen, pero que COLPENSIONES sea la administradora de pensiones a donde debe pertenecer el demandante, respetuosamente solicito a los señores magistrados indicar claramente en la sentencia que AFP PROVENIR S.A., traslade a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de el señor CARLOS JOSE MÚNERA BARBOSA tales como: (i)cotizaciones, (ii) bonos pensionales, (iii) sumas adicionales de la

aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, (iv) cuotas de administración y la indexación de las mismas, (v) el porcentaje de garantía de pensión mínima y (vi) el traslado de los reaseguros y seguros previsionales; tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1689 de 2019; SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, entre otras.”

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

El análisis del caso versará sobre lo que es objeto de recurso de apelación atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad, al sustentarse el recurso de apelación.

Conforme lo anterior, si bien fue motivo de apelación por parte de PORVENIR S.A., la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional del demandante, ningún reproche se realiza que el regreso al RPM, se haya ordenado a PENSIONES DE ANTIOQUIA, entidad esta que no apeló la sentencia, por lo que solo se resolverá el recurso de PORVENIR S.A., sobre la referida ineficacia, que fue el único asunto recurrido.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a

su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

Contrario a lo argumentado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que el accionante, estando afiliado al Régimen de Prima Media administrado tanto por el extinto ISS como por PENSIONES ANTIOQUIA, como se acredita con la historia laboral que milita a folios 27 y 28 y con el certificado de información laboral que obra a folio 38, se afilió a la administradora del RAIS PORVENIR S.A. el 14 de agosto de 2002, conforme se anota en el formulario de afiliación a dicha AFP visible a folio 134, con efectividad al 1° de octubre de dicha anualidad como se advierte del certificado SIAFP obrante a folio 135.

De otra parte, en este caso, si bien el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 30 de junio de 1995 con 35 o más años o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PORVENIR S.A. en el año 2002 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; **sobre todo cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por el demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:10:31 del video de la audiencia de trámite y juzgamiento (documento 12 del expediente digital), no se advierte que este haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, como bien lo manifestó la Juez *a quo*, y contrario a lo manifestó por PORVENIR S.A. en el recurso, la Jurisprudencia de la SCL de la CSJ ha señalado claramente, que para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PORVENIR S.A. siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, sin que resulten de recibo los argumentos expuestos por PORVENIR S.A., referente a la calidad de documento público del formulario de afiliación y su presunción de autenticidad, o al hecho de que el demandante haya permaneció afiliado

al RAIS permitiendo el descuento de las cotizaciones, pues ninguna de estas situaciones tiene la facultad de subsanar el incumplimiento del deber de información por parte de dicha AFP, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por el demandante en el año 2002 cuando se trasladó del RPM a la AFP PORVENIR S.A.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la ineficacia del traslado del actor al RAIS, quedando incólume en consecuencia la orden del regreso a PENSIONES DE ANTIOQUIA como reactivación de la afiliación al RPM, por no haber sido este punto objeto de apelación.

Ahora, en lo que tiene que ver con la orden de la *a quo*, de reintegrar a PENSIONES DE ANTIOQUIA el bono pensional que pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a PENSIONES DE ANTIOQUIA, por lo que tal orden será precisada.

Frente a la prescripción de los denominados gastos de administración que plantea la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, considera la Sala que ella no opera, toda vez que la obligación de restituir estos rubros se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de las sentencias que la declaran, por lo que no sería procedente la prescripción de las cuotas de administración, incluyendo lo descontado para el pago de los seguros previsionales.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada será CONFIRMADA y ACLARADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. por haber resultado vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **CARLOS JOSÉ MÚNERA BARBOSA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** y **PENSIONES DE ANTIOQUIA**, **ADICIONÁNDOLA** en el sentido de indicar que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. a PENSIONES DE ANTIOQUIA, ACLARANDO que que, en el evento, que el bono pensional tipo A, a favor del actor hubiere sido pagado, se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del demandante. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido,

Los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cf487801811b3f3a48a78c8966a057ba970a4e01b4879cdeb7a444b0d94af8fb**

Documento generado en 14/07/2022 03:33:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>